La política exterior de la "patria milagro" y su subordinación plena a intereses imperiales



Jairo Estrada Álvarez
Profesor del Departamento de Ciencia Política
Universidad Nacional de Colombia

No ha sido necesario ejercer presión por parte de la potencia imperial. Tampoco simular, como en el pasado, la existencia de planes propios que requieren de apoyo. La anunciada "patria milagro" no es otra que la que asume, por "voluntad propia" y "soberana", la condición de Estado vasallo. El gobernante y su equipo no solo se comportan como súbditos, sino que se sienten orgullosos de su vasallaje y de cumplir una función amplificadora en la región, de caja de resonancia, a fin de reforzar esa posición.

Ha iniciado un nuevo cuatrienio presidencial que da continuidad a los aspectos sustantivos propios del régimen de democracia gobernable de excepción que impera en el país desde la Constitución de 1991. Los cambios de acento observados durante el gobierno de Gustavo Petro dieron cuenta de un "giro progresista" transitorio, pero no fueron suficientes para afectar los fundamentos estructurales de dicho régimen; tampoco para incidir de manera significativa sobre sus condiciones de reproducción. Se terminó imponiendo la ya contemplada alternancia; en esta ocasión, con la llegada al gobierno de un proyecto político reaccionario y de ultraderecha que se autodefine como de la "patria milagro".

No hay aún elementos de juicio suficientemente consolidados para formular una caracterización rigurosa del gobierno que inicia en el campo del que se ocupa este texto: la política exterior. Por tal razón, los referentes de análisis se encuentran en las declaraciones de campaña, en los anuncios posteriores a la elección y en el minúsculo discurso de posesión presidencial; también, en las manifestaciones de adhesión al pensamiento y a las políticas de ultraderecha y de corte fascista, particularmente las del gobierno de Donald Trump, así como en las identidades con otros gobiernos de la región que comparten la misma ideología.

Rasgos generales de la política exterior

En la cartilla *El nuevo gobierno de Colombia. Patria Milagro. Inicia un nuevo capítulo para Colombia*, que se entregó a los asistentes nacionales e internacionales al acto de posesión presidencial, en la parte de "Colombia en el mundo", se anuncia que "Colombia se proyecta en el mundo con una diplomacia seria, moderna y orientada a la defensa de sus intereses. Fortaleceremos la cooperación, promovemos el comercio, impulsamos la inversión y abrimos nuevas oportunidades para las regiones y los colombianos"; y se describen cuatro lineamientos: "diplomacia al servicio del país", "cooperación internacional", "comercio e inversión", "liderazgo regional". Asimismo, se habla de "una nación que dialoga con el mundo, defiende su soberanía y construye puentes de cooperación".

Esos enunciados, que parecen neutros y propios de cualquier gobierno, esconden de manera deliberada la marcada ideologización reaccionaria y de ultraderecha que caracterizará la política exterior y la diplomacia de la "patria milagro". La práctica de la falsificación de la realidad y la instalación de realidades paralelas construidas con los dispositivos que brinda el capitalismo digital es asunto ya probado con éxito en la campaña electoral, que hará parte de las prácticas continuas del cuatrienio que inicia, incluida la política exterior.

Al despojar tales enunciados del oscuro velo que los cubre, aparecen los rasgos que, en realidad, caracterizarán la política exterior y la diplomacia, todos ellos entrelazados e interrelacionados: el anticomunismo; el fanatismo religioso; el racismo; la subordinación plena e irrestricta a los intereses de los Estados Unidos, y el estímulo a la acumulación capitalista transnacional.

Tales rasgos son concordantes, por una parte, con la ideología del nuevo gobernante y su equipo y, sobre todo, con los intereses del consenso de clase que representa (en sus diferentes expresiones) y que lo llevó a la primera magistratura para detener una posible continuidad del progresismo, definido por la ultraderecha como una «amenaza comunista», por cierto, contra toda evidencia histórico-concreta. Por la otra, con las tendencias de los proyectos políticos de la ultraderecha mundial y de la región, muchos de ellos ya en el gobierno, que cooperan y actúan de manera unificada con los recursos que brindan el *tecnocapitalismo* y la oligarquía digital para imponer, a escala planetaria, sus proyectos de ajuste al orden social capitalista y de renovación de sus condiciones de reproducción, con énfasis en la construcción de una nueva hegemonía que debe emerger en medio de su "guerra cultural".

El anticomunismo y el fanatismo religioso son rasgos que fácilmente se juntan, pues el primero es visto como la encarnación del mal en todas las expresiones imaginables y como manifestación corrosiva de los principios fundantes de la sociedad occidental y de su «orden democrático» (judeocristianismo, libertad individual, propiedad privada, tradición, familia), según como los concibe el pensamiento de ultraderecha. En el segundo se encuentra el antídoto. En este caso, se trata de posicionar la idea de un pretendido origen divino de la cruzada que se emprenderá para derrotar al comunismo maligno y de que los pasos por seguir están guiados por Cristo Rey en la construcción de la «patria milagro».

Además de la notoria ideologización de ultraderecha de la política exterior, es evidente que su inspiración se encuentra igualmente en el estímulo a la acumulación capitalista en sus diversas modalidades. La subordinación a los intereses de los Estados Unidos va de la mano de la generación de mejores condiciones para el acceso a recursos estratégicos a través de la inversión extranjera y la protección de dichas inversiones. En esa dirección deben comprenderse las disposiciones en curso para reactivar la locomotora extractivista.

La designación del ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar, y del embajador ante la OEA, Alejandro Ordoñez, son los primeros ejemplos suficientemente ilustrativos del sello que se le imprimirá a la política exterior. Las posturas ideológicas de ambos así lo indican. Me detengo brevemente en el primero, pues el segundo es suficientemente conocido.

Bula, ultraconservador y ultraderechista, "cristiano" y "pro-Occidente", con una borrosa trayectoria diplomática internacional y presunta experticia en geopolítica, sostiene la tesis de una "guerra cultural" a escala mundial para enfrentar la amenaza contra la "identidad nacional" –por lo que se le define como "soberanista"– que representa el globalismo promovido por la ONU y el *wokismo*. Asimismo, contempla la existencia de un "eje del mal" moderno en el que confluirían China y Rusia, el extremismo islámico y regímenes totalitarios, articulándose con el crimen transnacional, incluido el narcotráfico, para amenazar los valores occidentales y desestabilizar el "orden democrático" en la región. El progresismo, con sus discursos globalistas –incluido el ambientalismo extremo– e ideológicos de género, adelantaría, en el nivel interno, propósitos desestructuradores de la identidad histórica, que sería esencialmente hispánica y cristiana. Desde ese entendimiento, se considera a los Estados Unidos e Israel como los baluartes y estandartes que ejercen el liderazgo en esa cruzada contra el mal. Donald Trump es definido como "salvador de Occidente" y el "hombre más poderoso del planeta".

Dada esa concepción, plenamente coincidente con las posturas del actual presidente, expresadas en diversos escenarios, no es difícil comprender la subordinación –no el alineamiento– declarada frente a la política exterior de los Estados Unidos y la asunción plena de su estrategia como propia; a ello se agrega la inusual e inaceptable condición de la nacionalidad estadounidense del presidente, quien ha juramentado defender, por encima de todo, los intereses de la potencia imperial.

A lo largo de la historia republicana, las clases dominantes colombianas y sus gobiernos han estado subordinados a potencias extranjeras. Desde 1914, cuando formalmente se diseñó la política del *respice polum* y, luego, cuando se elevó a doctrina oficial entre 1918 y 1921, durante el gobierno de Marco Fidel Suárez, la política exterior del Estado colombiano se ha encontrado sometida, sin restricción alguna, a los designios de la potencia imperial. Durante el cuatrienio del gobierno progresista hubo cambios transitorios de enfoque, con tintes de soberanía y desencuentros y contradicciones en escenarios internacionales, como se expresaron particularmente en torno al genocidio sionista contra el pueblo palestino, apoyado por los Estados Unidos; la ruptura de relaciones con Israel; la agenda ambientalista; el cambio climático; los derechos humanos (incluido el enfoque de género); las políticas migratorias; la política antidrogas; los propósitos de diversificación de las relaciones exteriores, entre otros. Sin superar, en todo caso, la condición única de Colombia en la Región como aliado estratégico y socio global de la OTAN.

Tras ese lapso progresista, se asiste a un momento nuevo que supera con creces las subordinaciones del pasado. No ha sido necesario ejercer presión por parte de la potencia imperial. Tampoco simular, como en el pasado, la existencia de planes propios que requieren de apoyo. La anunciada "patria milagro"



no es otra que la que asume, por "voluntad propia" y "soberana", la condición de Estado vasallo. El gobernante y su equipo no solo se comportan como súbditos, sino que se sienten orgullosos de su vasallaje y de cumplir una función amplificadora en la región, de caja de resonancia, a fin de reforzar esa posición. De esa manera, además de halagar al "salvador del planeta", anunciando decisiones que trascienden incluso lo que este ni siquiera ha pedido, se consolida el "interés propio" y el poder que conlleva estar arropado por ese salvador. Debe decirse que, frente a esa circunstancia, no hay recelo alguno en el "consenso de clase" que llevó a De la Espriella a la presidencia. Al contrario, grupos económicos, gremios del capital, medios de comunicación y partidos políticos del establecimiento exhiben complacencia y advierten, más bien, una "ventana de oportunidad" para reforzar el poder y la dominación de clase que apreciaban amenazados y para acrecentar su escandalosa riqueza. Todo indica que la política exterior, en este marco, será la propia de una neocolonia.

Primeras decisiones de política exterior

Los primeros anuncios y las primeras decisiones del gobierno que inicia son muestra incontrovertible de los asertos anteriores. Entre tanto, dentro de ellos se encuentran:

1. La inclusión de Colombia dentro de la iniciativa político-militar de seguridad regional, diseñada por el gobierno de Donald Trump, denominada Escudo de la Américas (también conocida como Coalición contra los Cárteles de las Américas, o ACC). A tal iniciativa se han adscrito todos los gobiernos de derecha y ultraderecha de la Región, asumiendo (y exhibiendo con absurdo orgullo) su sometimiento pleno a los intereses estratégicos de los Estados Unidos. El Escudo de las Américas es la materialización de la Estrategia de Seguridad Nacional de esa potencia imperialista, presentada en diciembre de 2025, en la cual se introdujo en "corolario Trump" para "actualizar" la "doctrina Monroe".

Con tal doctrina, denominada también "doctrina Donroe", se busca reafirmar y consolidar el dominio imperialista sobre la Región, pretendiendo contrarrestar la influencia de potencias externas (particularmente China y Rusia) y de bloques económicos (por ejemplo, los BRICS). El discurso de defensa del "orden democrático" en Nuestra América, en el entendimiento imperial de ese orden, encubre no solo la consideración de nuestra Región como "patio trasero", sino también, y sobre todo, la garantía de acceso a recursos estratégicos (recursos energéticos, minerales y tierras raras, recursos hídricos y de biodiversidad) y con ello el favorecimiento de la acumulación capitalista transnacional.

El Escudo de las Américas es expresión de la faceta militarista de la Estrategia de Seguridad Nacional y representa un "cerco de seguridad regional" para consolidar esa estrategia, conformado con los numerosos gobiernos afines, léase Estados vasallos. A través de él, más allá de la anunciada asistencia y cooperación militar y de inteligencia, quedan abiertas las puertas para la intervención directa de los Estados Unidos en países de la Región, sea a través del fortalecimiento de las bases militares existentes, la instalación de nuevas o de la realización operaciones militares conjuntas, que comprenden la participación de tropas estadounidenses.

En este punto es necesario insistir en que el crimen transnacional actual que se afirma pretender combatir es comprendido como una articulación de potencias externas, extremismo islámico, regímenes totalitarios, narcotráfico, migrantes y progresismos cómplices. En ese sentido, se trata también de una cruzada judeocristiana, anticomunista y racista. Para un gobierno vasallo, como el de la "patria milagro", que asume a plenitud el proyecto MAGA, se trata de una función y una tarea que se asume con satisfacción y ufanía. La intervención militar en Venezuela y el control que ejercen los Estados Unidos sobre ese país y sus recursos estratégicos constituyen una muestra anticipada de la realidad histórico-concreta que se vive en el presente de la Región.

La señalada subordinación irrestricta constituye, igualmente, una devolución por el apoyo brindado por Donald Trump y Marco Rubio a la campaña electoral de De la Espriella. Siempre tuvieron claro que el hoy presidente en ejercicio sería un hombre vasallo, plegado a sus intereses.

Más allá de las razones expuestas, expresivas del anticomunismo extremista propio de los proyectos de la ultraderecha, esa decisión de ruptura, que contraría principios básicos de la diplomacia, es ante todo un acto de ingratitud con Cuba. A ese país y a su gobierno, se le debe reconocer su apoyo irrestricto e incondicional a los propósitos de construcción de paz llevados a cabo a lo largo de décadas en Colombia. Siempre a solicitud expresa de los respectivos gobiernos.

2. La reanudación de las relaciones con Israel es una expresión adicional de una política exterior vasalla. Más que el restablecimiento de relaciones diplomáticas, las decisiones gubernamentales indican una clara subordinación a la política exterior del sionismo israelí. En oposición a la gran mayoría de Estados del mundo, se ha reconocido a Jerusalén como capital del Estado de Israel (solamente 6 de los 195 que integran la ONU lo han hecho). Jerusalén es una ciudad cuyo status hace parte del irresuelto conflicto internacional árabe-israelí; Jerusalén Oriental fue invadida y ocupada militarmente por Israel en 1967 y es capital constitucional y administrativa del futuro Estado palestino. Así es que su reconocimiento como capital es una bofetada a los derechos del pueblo palestino. Concordante con esa decisión se encuentra la orden de suspender la apertura de la embajada en Palestina y de retirar el apoyo a la demanda por genocidio del pueblo palestino interpuesta por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia el 29 de diciembre de 2023. Como si fuera poco, se ha reconocido también la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, convirtiéndose en el segundo país del mundo después de Estados Unidos (en 2019), que así lo hace. Se trata de un territorio sirio, invadido en 1967, durante la denominada Guerra de los Seis Días, que desde entonces se encuentra ocupado militarmente y fue anexado por Israel en 1981, mediante medida transgresora del derecho internacional. Esa acción imperialista del sionismo israelí ha sido vergonzosamente legitimada por el gobierno de De la Espriella, aduciendo la importancia de ese territorio para la seguridad de Israel frente a amenazas externas.

En la "patria milagro" se convertirá de nuevo a Colombia en la Israel de América Latina, pues lo que se anuncia adicionalmente es el restablecimiento de la estrecha alianza militar y de inteligencia que se forjó en el pasado, especialmente en los gobiernos de Uribe Vélez. Así es que, al intervencionismo del Escudo de las Américas, será preciso agregarle el sionista israelí. Ya está en preparación una numerosa delegación de alto nivel que visitará Israel en octubre del año en curso, que además del componente militar y de inteligencia, se afirma busca poner en marcha una comisión económica binacional, atraer inversión extranjera y tecnología y buscar beneficios



para el talento joven. En todo esto está incluido el pago de favores al rol desempeñado por la inteligencia sionista en el triunfo electoral de De la Espriella.

3. El "ajuste diplomático" ordenado por De la Espriella, más allá del velo del ahorro de recursos, se inscribe dentro de la concepción ya expuesta de la política exterior, incluidos sus tintes racistas y el propósito de borrar las huellas progresistas en la diversificación de las relaciones internacionales, incluso las diplomáticas. La gran mayoría de esos cierres anunciados así lo explican. Sin duda, predominan factores ideológicos, como en los casos de Sudáfrica (por su posición frente a Israel), Argelia (por su postura como detractora de Israel y sus relaciones con Cuba y Venezuela) y Senegal (por sus posturas nacionalistas y progresistas). En los cierres de América Latina y el Caribe se replica la misma lógica. Con Cuba y Nicaragua se romperán relaciones por tratarse, se afirma, de tiranías con las que "no habrá vínculo alguno". El caso de Cuba merece una atención posterior en este texto. El caso de Barbados podría inscribirse dentro del concepto de ideologización de la política exterior, dados algunos de sus rasgos progresistas y socialdemócratas y las relaciones sostenidas con Cuba. Aunque, en este caso, como en los de Haití, Ghana y Etiopía, algunos países europeos (República Checa, Hungría y Rumania) y Azerbaiyán, podrían contemplarse razones de austeridad, las mismas se debilitan cuando se trata de comprender las relaciones diplomáticas, pues estas no deben reducirse a una perspectiva exclusiva de relación costo-beneficio económico.

Las relaciones entre los países y naciones, además de comerciales son también políticas, sociales y culturales. Diversificarlas y profundizarlas es propósito de cualquier Estado moderno. En Nuestra América son además relaciones sustentadas en un pasado común de hermandad, cooperación y de lucha por la soberanía y la Patria Grande. Con África nos unen lazos históricos y de sangre. En Etiopía, en Addis Abeba, por ejemplo, se encuentra hoy la sede de la Organización de Estados Africanos. Cerrar esa embajada es cerrarse a interlocuciones con ese continente.

Por otra parte, las decisiones de unificar las embajadas en la UNESCO con la de Francia, y de la FAO con la de Italia, junto con la mentada austeridad, podrían indicar igualmente una subordinación a la visión trumpista sobre el rol de la ONU y sus organismos internacionales.

4. A fin de borrar todo sello progresista de la política exterior, se reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental. El gobierno de Petro había establecido en agosto de 2022 relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). El Sahara Occidental es considerado por la ONU como un territorio no autónomo pendiente de descolonización; en diferentes momentos, la RASD ha sido reconocida por 84 países. La RASD es miembro de la Organización Estados Africanos desde 1984. Se trata de una postura que, alineándose con el Reino de Marruecos, es contraria a los propósitos de los movimientos de liberación nacional, como es el caso del Frente Polisario, organización que ha liderado la lucha por la independencia del señalado territorio.

5. El país ha conocido por boca de Nate Morris, embajador designado de Estados Unidos en Colombia, en audiencia de confirmación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado celebrada el 5 de

agosto, que el presidente De la Espriella le había manifestado su "absoluto compromiso" y la intención de retirar a Colombia del memorando de entendimiento de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (también conocida con la Ruta de la Seda) suscrito con China por el gobierno de Petro en mayo de 2025. Ese insólito anuncio, pues no fue hecho por el propio presidente, es una muestra más de la relación de subordinación frente a los Estados Unidos. El memorando de la Ruta de la Seda ha sido suscrito por más de 150 países (incluso gobiernos de ultraderecha en América Latina, como los de El Salvador, Argentina, Chile y Ecuador, se mantienen dentro de esa iniciativa). Aunque no ha habido aún anuncio formal del actual del gobierno de Colombia, todo parece indicar que el país será retirado próximamente de la señalada iniciativa, lo cual supone subordinarse a la tesis trumpista sobre la influencia china en la Región y la exhortación a escoger entre Estados Unidos y China.

La política exterior de la "patria milagro" trasciende en diferentes aspectos de la propia política imperial estadounidense; es más papista que el papa. Como es propio de los vasallos se trata también de halagar al "gran salvador del planeta". El anuncio de que el relacionamiento con el gobierno de Venezuela pasa por las definiciones de Washington y no a través del contacto directo es suficientemente revelador.

6. Además de la notoria ideologización de ultraderecha de la política exterior ya expuesta, es evidente que su inspiración se encuentra igualmente en el estímulo a la acumulación capitalista en sus diversas modalidades. La subordinación a los intereses de los Estados Unidos va de la mano de la generación de mejores condiciones para el acceso a recursos estratégicos a través de la inversión extranjera y la protección de dichas inversiones. En esa dirección deben comprenderse las disposiciones en curso para reactivar la locomotora extractivista.

La ruptura de relaciones con Cuba

La ruptura de relaciones con Cuba anunciada por el gobierno de la "patria milagro" merece una particular atención. Ella expresa la ya señalada ideologización de ultraderecha y se inscribe dentro del propósito mayor de aniquilación de la experiencia de la revolución cubana y de lo que ella ha significado para las luchas por la soberanía, la autodeterminación y la construcción de proyectos alternativos de sociedad en el mundo y particularmente en América Latina.

Con esta medida el gobierno de De la Espriella suscribe plenamente las tesis del documento preparado por el Departamento de Estado y su secretario, Marco Rubio, denominado *Cuba. La capital del comunismo del siglo XXI,* publicado el 20 de julio del año en curso. Se trata de un texto que tiene el propósito de justificar (una vez más) la presunta amenaza extraordinaria que representaría Cuba frente a la seguridad nacional de los Estados Unidos, en el que a través de una intencionada falsificación de la historia se invierten las cargas para mostrar a Cuba como una suerte de victimario de la potencia imperialista, que ha promovido y desarrollado toda suerte de movimientos y acciones desestabilizadoras del "orden democrático" estadounidense y ha alentado el socavamiento de la "democracia" en la Región mediante el apoyo a organizaciones comunistas y terroristas, articulándose con otras potencias extranjeras (China, Rusia, Irán) y con el crimen transnacional.

A Cuba se le sindica de haber adelantado una ofensiva ideológica deliberada contra los valores de la "civilización occidental" y el "modelo democrático", de haber dirigido campañas de inteligencia, guerra



sicológica y subversión política contra los Estados Unidos y la Región, de ser el nodo central que nutre, orienta e influye en movimientos políticos y activistas de izquierda dentro de los Estados Unidos, de ser prácticamente la rectora de la subversión revolucionaria antiestadounidense mundial. Semejante despropósito, que no resiste análisis histórico riguroso alguno, no tiene otro objetivo que justificar la política imperialista más reciente del gobierno de Trump contra Cuba, mediante la cual, por una parte, se ha exacerbado hasta el extremo la guerra económica que, durante más de seis décadas, se ha adelantado contra esa nación caribeña, llevándola a niveles propios de un genocidio.Y, por la otra, se busca incrementar el descontento social para provocar un derrocamiento del "régimen comunista" desde dentro o en ausencia de esa opción –dada la resistencia cubana– de intervenir de manera directa. Es evidente que el gobierno de Trump sueña con una condición neocolonial de Cuba. Esa aspiración tiene otro de sus soportes en la mafia cubano-americana y la ultraderecha asentada en el Estado de la Florida y en Miami, con fuerte influencia en la política exterior de los Estados Unidos y de la cual el actual secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, es uno de sus mejores exponentes. El presidente De la Espriella se concibe como integrante de esa comunidad y contó con todo su apoyo en la campaña que lo llevó a la presidencia. Así es que no sorprende en absoluto la ruptura de relaciones con Cuba.

Más allá de las razones expuestas, expresivas del anticomunismo extremista propio de los proyectos de la ultraderecha, esa decisión de ruptura, que contraría principios básicos de la diplomacia, es ante todo un acto de ingratitud con Cuba. A ese país y a su gobierno, se le debe reconocer su apoyo irrestricto e incondicional a los propósitos de construcción de paz llevados a cabo a lo largo de décadas en Colombia. Siempre a solicitud expresa de los respectivos gobiernos. A manera de ejemplo, durante los mandatos presidenciales de derecha de Uribe Vélez, a pesar de las protuberantes diferencias entre uno y otro gobierno, no solo se sostuvieron relaciones diplomáticas, sino que Cuba desempeñó un rol significativo y prestó su territorio tanto en los primeros contactos exploratorios (en 2002) como en las rondas exploratorias que se celebraron con el ELN en La Habana entre diciembre de 2005 y agosto de 2007, en la búsqueda (fallida) de una solución política con esa guerrilla. El acuerdo de paz de 2016, suscrito por la extinta guerrilla de las FARC y el gobierno de Santos, contó con la valiosa contribución de Cuba, que además de brindar su territorio para el desarrollo de los primeros acercamientos y las negociaciones, fungió como país Garante junto con Noruega. Esa condición se ha extendido hasta el presente por esos dos países en labores de acompañamiento al proceso de implementación del señalado acuerdo.

Por otra parte, Cuba ejerció el rol de Garante, junto con otros países, en la fase secreta y exploratoria con el ELN, que comenzó en 2014 durante el gobierno de Santos. Tras la instalación formal de los diálogos y negociaciones con esa guerrilla en 2017, en Ecuador, Cuba asumió, desde mayo de 2018, la sede principal de ese proceso. Después del congelamiento *de facto* que tuvo lugar durante el segundo semestre de 2018, tras el inicio del gobierno de derecha de Duque y, posteriormente, del atentado del ELN contra la Escuela de Policía General Santander, el 17 de enero de 2019, se produjo, al día siguiente, la ruptura definitiva e inmediata de la mesa de conversaciones. El gobierno de Duque exigió la extradición de los comandantes guerrilleros que hacían parte de la Delegación de Paz en La Habana. Cuba, por su parte, se negó a tal requerimiento, en atención a lo dispuesto en el "Protocolo en caso de ruptura de la negociación de paz Gobierno-ELN", aduciendo que dicho protocolo representaba un compromiso de Estado, independiente del gobierno de turno, y que estaba en juego, igualmente, su credibilidad como país Garante. La posición del otro Garante, Noruega, fue de firme respaldo al cumplimiento del derecho internacional y de los protocolos firmados, coincidiendo con la postura cubana.

La situación así creada, asociada con las gestiones del gobierno de Duque ante el primer gobierno de Donald Trump, se constituyó en argumento –realmente en pretexto– para incluir a Cuba el 12 de enero de 2021 dentro de la lista de países patrocinadores del terrorismo expedida anualmente por el gobierno de los Estados Unidos, con lo cual se acentuaron aún más las medidas de guerra económica contra el país caribeño. El rol de Garante, a pedido expreso del Estado colombiano, terminó de manera injusta en sanciones adicionales contra Cuba, acentuando su ya difícil situación. A pesar de esas circunstancias –y en medio de la tensión– no se rompieron las relaciones diplomáticas. Aunque debe decirse que ganas no le faltaron al gobierno de Duque.



En el mandato de Gustavo Petro se reanudaron las negociaciones con el ELN; Cuba –fiel a su política de apoyo a los procesos de paz en Colombia– reasumió su rol de Garante de ese proceso. Tras el reinicio formal en noviembre de 2022 en Caracas, Cuba participó como Garante en los cinco ciclos que se alcanzaron a desarrollar. Uno de ellos, el tercero, se llevó a cabo entre mayo y junio de 2023 en La Habana. Como es de amplio conocimiento, el gobierno de Petro anunció el 17 de enero de 2025 la suspensión formal y definitiva de los diálogos y negociaciones con el ELN, tras la ofensiva de esa guerrilla en la región del Catatumbo. Petro definió las acciones de esa guerrilla como "crímenes de guerra" y la sindicó de carecer de voluntad real de paz. Por otra parte, en el marco de la política de "paz total", Cuba aceptó también fungir como Garante –junto con Noruega y Venezuela– del proceso de paz con la Segunda Marquetalia. En este caso, se trató de una corta labor, desarrollada entre febrero y noviembre de 2024. Ese proceso llegó en ese mes a su final formal.

La ruptura de relaciones con Cuba no trae ningún beneficio para la población colombiana. Las relaciones con ese país han trascendido su rol de Garante de procesos de paz, abarcando campos de la cooperación científica, cultural y comercial. Para el gobierno de la "patria milagro" se trata de una demostración más de su declarada "guerra cultural".

En el contexto del cierre anunciado a cualquier propósito de salida negociada del conflicto armado y la violencia en el país, por parte del gobierno actual, no hay espacio alguno para considerar acompañamientos de la comunidad internacional. No es preciso acudir a los buenos oficios, como los desempeñados por Cuba. Si en la actualidad son necesarios tales apoyos, lo son en una lógica militarista y de prolongación de la guerra. No es casual que Estados Unidos e Israel figuren en primer plano.

La política exterior de la "patria milagro" se acompañará de la movilización política del capital transnacional en sus diversas manifestaciones. El gobierno de Trump ha anunciado su intención de tramitar apoyos por mil millones de dólares para apalancar la política de seguridad de De la Espriella. Israel también ha manifestado su disposición de aportar recursos. Los organismos multilaterales, el FMI, el Banco Mundial, el BID y la CAF, tienen sus chequeras abiertas para financiar los requerimientos de la "patria milagro". Al fin y el cabo se trata de fortalecer un proyecto político de ultraderecha, en un país de indudable importancia para los intereses estratégicos imperiales en toda la Región. Lo que seguirá es la profundización de las relaciones de dependencia frente al imperialismo estadounidense y los continuos anuncios de un gobierno vasallo. Desde ahora puede afirmarse que una cosa son los propósitos del gobierno de la "patria milagro", así se presenten como una aplanadora de anuncios y disposiciones, y otra sus verdaderas posibilidades y alcances. Vivimos en una sociedad en la que el antagonismo y el conflicto social y de clase delinean los trazos de la historia. Resistencias y luchas están también a la vista.